

Coyhaique, a dieciséis de mayo del año dos mil veinticinco.

VISTOS:

Con fecha 20 de enero de 2025, en causa RUC N° 2301397181-1, RIT N°O-155-2024, se dictó sentencia definitiva por el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Coyhaique, la que declaró lo siguiente:

I.- Que SE CONDENA al acusado JUAN CARLOS IBAÑEZ PAREDES, ya individualizado, a la pena de CINCO AÑOS Y UN DÍA DE PRESIDIO MAYOR EN SUGRADO MÍNIMO, accesoria de inhabilitación absoluta perpetua para cargos y oficios públicos y derechos políticos y la de inhabilitación absoluta para profesiones titulares mientras dure la condena, como autor de un delito de HOMICIDIO SIMPLE, previsto y sancionado en el artículo 391 N°2 del CP, en grado frustrado, cometido el día 19 de diciembre de 2023 en el sector de San Lorenzo, comuna de Cochrane, en contra de D.J.S.C.

II.- Que, además, se CONDENA al referido acusado a la pena de TRES AÑOS Y UN DÍA DE PRESIDIO MENOR EN SU GRADO MÁXIMO, más accesoria de inhabilitación absoluta perpetua para derechos políticos y la de inhabilitación absoluta para cargos y oficios públicos durante el tiempo de la condena, como autor de un delito de TENENCIA DE ARMA DE FUEGO, previsto y sancionado en el artículo 9 en relación al artículo 2 letra b), ambos de la Ley 17.798 sobre Control de Armas, en grado consumado, cometido el día 20 de diciembre de 2023, en sector San Lorenzo, comuna de Cochrane, atendido que mantenía en su domicilio un rifle calibre .22 y 4 municiones calibre .22, aptos para el disparo, sin contar con autorización para ello.



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: FPSJXUPBLXX

III.- Igualmente, **SE CONDENA** al acusado **IBÁÑEZ PAREDES**, a la pena de QUINIENTOS CUARENTA Y UN DÍAS DE PRESIDIO MENOR EN SU GRADO MEDIO, más accesoria la de suspensión de cargo u oficio público durante el tiempo de la condena, **como autor de un delito de TENENCIA DE MUNICIONES**, previsto y sancionado en el artículo 9 en relación al artículo 2 letra C), ambos de la Ley 17.798 sobre Control de Armas, en grado consumado, cometido el día 20 de diciembre de 2023, en sector San Lorenzo, comuna de Cochrane, atendido que tenía en su domicilio una munición calibre 7.62 apta para el disparo, sin contar con autorización para ello.

IV.- Atendida el quantum de las penas impuestas, no se cumplen los requisitos para conceder una pena sustitutiva, por lo que el sentenciado deberá cumplir de modo efectivo la pena impuesta, la que se computará desde el día que fue detenido, esto es, desde el 20 de diciembre de 2023, fecha desde la cual ha permanecido privado de libertad ininterrumpidamente, sujeto a prisión preventiva.

Conforme a lo anterior, se deberá considerar un abono de 394 días. Además, deberán considerarse los días que permanezca privado de libertad desde esta fecha hasta que la sentencia quede ejecutoriada.

V.- Como sanción accesoria se aplica el COMISO del rifle, cuatro municiones calibre .22, y de la munición calibre 7.62, presentadas como evidencias, las que deberán ser remitidas a Arsenales de Guerra y el Depósito Central de Armas de Carabineros de Chile, respectivamente.

También se impone el COMISO sobre el cuchillo incorporado.



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: FPSJXUPBLXX

VI.- En su oportunidad, devuélvase al condenado la suma de 400 mil pesos que consignó en la cuenta corriente del tribunal.

VII.- Ejecutoriada la sentencia, deberá incorporarse la huella genética del sentenciado al registro de condenados que establece la Ley 19.970.

VIII.- Que se exime del pago de costas al sentenciado.” (sic)

En contra de esta decisión jurisdiccional, en el primer otrosí de la presentación de 4 de febrero de 2025, el defensor privado, don Aldo Basqueé Cid, en representación del sentenciado, deduce recurso de nulidad invocando como fundamento el artículo 344 del Código Procesal, en razón de que la sentencia no fue leída el plazo correspondiente, solicitando: “se declare nulo el juicio y de la sentencia por la cual fue condenado mi representado y en virtud de que el perjuicio sólo puede repararse con la realización de un nuevo juicio, se ordene retrotraer la causa al estado de celebrarse una nueva audiencia de juicio oral por tribunal no inhabilitado al efecto.” (sic).

En el segundo otrosí, del mismo libelo antes referido, se invoca el motivo de nulidad contenido en el artículo 374 letra e) en concatenación al artículo 342 letra c) del Código Procesal Penal, por cuanto la sentencia definitiva impugnada no valoró correctamente la prueba, solicitando: “se acoja el recurso de nulidad por la causal de nulidad invocada, se anule la sentencia definitiva pronunciada por el Tribunal Oral en lo Penal de Coyhaique fecha 20 de enero de 2025, y en virtud de lo dispuesto en el artículo 386 del Código Procesal Penal, proceda el tribunal ad quem a anular el juicio y la sentencia definitiva debiendo retrotraerse la causa al estado de celebrarse una nueva audiencia de juicio oral por tribunal no inhabilitado al efecto.”. (sic).



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: FPSJXUPBLXX

Con fecha 23 de abril de 2025, se declaró admisible el recurso de nulidad antes referido.

El 28 de abril de 2025, se realizó la audiencia para la vista del recurso, con la asistencia de manera presencial del abogado representante de la defensa privada, don Aldo Basqueé Cid, alegando a favor de su libelo impugnatorio y, de forma telemática, el abogado representante del Ministerio Público, don Miguel Ángel Riquelme Cortés, en contra de aquel, quedando la causa en estado de acuerdo.

CONSIDERANDO:

En cuanto a la causal de nulidad fundada en el artículo 344 del Código Procesal Penal.

PRIMERO: Que, el recurso de nulidad intentado por el recurrente en primer otrosí de su escrito se funda, en su opinión, en la causal establecida en artículo 344 del Código Procesal Penal, esto es, por haberse dado lectura a la sentencia fuera del plazo legal.

Para comenzar expone un orden cronológico de los hitos procesales pertinentes, a saber: a) Por medio de la resolución de fecha 04 de noviembre de 2024, del Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Coyhaique, se fijó audiencia de juicio oral para el día 03 de enero de 2025; b) Con fecha 03 de enero de 2025, se dio inicio al juicio oral; c) Con fecha 09 de enero de 2025 se realizó la última audiencia de juicio, en la cual se dictó veredicto condenatorio en contra de su representado y se fijó audiencia de lectura de sentencia, para el día 17 de enero de 2025 a las 15:50 horas; d) Con fecha 17 de enero de 2025, no se realiza la audiencia de lectura de sentencia programada y con la misma fecha a las 17:01 horas, se notificó la resolución, que firma solo la magistrada Rosalía Mansilla Quiroz, mediante la cual se



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: FPSJXUPBLXX

reprograma la fecha de lectura de sentencia para el día 20 de enero de 2025; e) Con fecha 20 de enero de 2025, se da lectura de la sentencia por la magistrada presidenta doña Natalia Gejman Seco.

Luego, fundamenta que la primera afectación en la dictación de la sentencia definitiva de autos, radica en que la resolución de fecha 17 de enero de 2025, que reagenda la audiencia de lectura de aquella sentencia, fue firmada solamente por la juez Rosalía Edith Mansilla Quiroz, por lo que estima que se vulnera lo señalado en el artículo 37 del Código Procesal Penal, en cuanto indica que las resoluciones que dicte el tribunal deberán ser firmadas por todos sus integrantes, en este caso, se trata de las magistradas Natalia Gejman Seco, Mónica Gisela Coloma Pulgar y la ya indicada, desconociendo si las otras juezas estaban de acuerdo con esta reprogramación.

En segundo lugar, sostiene que en este caso se fijó la audiencia de lectura de sentencia para el día viernes 17 de enero de 2025, la que no se verificó, ya que por resolución de la magistrada Rosalía Mansilla Quiroz se reprogramó para el día 20 de enero de 2025, en circunstancias que el artículo 344 del Código Procesal Penal indica que, si no ocurre la lectura de la sentencia previamente programada, se deberá citar a una nueva audiencia para esos efectos, la que en caso alguno podrá tener lugar después del segundo día contado desde la fecha fijada para la primera y que transcurrido este plazo adicional sin que se comunicare la sentencia se producirá la nulidad del juicio, lo que, a su juicio, ocurre en la especie, ya que se leyó la decisión jurisdiccional al tercer día y no antes del segundo día, posterior a la fecha en que no se leyó la referida resolución definitiva,



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: FPSJXUPBLXX

debiendo verificarse ello en una fecha no superior al día 19 de enero de 2025, excediendo el límite exigido por la norma.

Además, sostiene que el 20 de enero de 2025, fecha en que se lee la sentencia, una de las magistradas se encontraba con permiso según el artículo 347 del Código Orgánico de Tribunales, por lo que está impedida de firmar o dictar cualquier resolución o sentencia emanada de ese Tribunal.

Finalmente, reclama que la sentencia definitiva tampoco cumple con el requisito exigido en la letra g) del artículo 342 del Código Procesal Penal, en cuanto aquella debe contener la firma de los jueces que la hubieren dictado, ya que la referida decisión no se firmó por ningún magistrado.

SEGUNDO: Que, por su parte, don Miguel Ángel Riquelme Cortés, por el Ministerio Público, en su alegato, solicitó el rechazo de la causal de nulidad invocada, dado que no concurre la causal esgrimida, por cuanto el plazo para la redacción de la sentencia se puede diferir hasta diez días, en tanto ésta fue leída dentro de plazo, cosa distinta es si ésta se realizó o no en la audiencia del viernes, lo que es un asunto administrativo distinto y un defecto no esencial, añadiendo que si no se cumple con la redacción dentro del plazo de diez días, se otorga uno adicional, mas no una audiencia y si en un nuevo término no se dicta la sentencia, se produce la nulidad del juicio, lo que no ocurre, ya que en el caso concreto se dictó la sentencia dentro de aquel término, que se extiende un día más por tratarse de un día inhábil.

TERCERO: Que, al efecto, se debe tener presente que en conformidad con el artículo 372 del Código Procesal Penal, el recurso



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: FPSJXUPBLXX

de nulidad se concede por las causales expresamente señaladas en la ley.

A su turno, el referido código establece solamente, en su artículo 373, dos causales genéricas y, luego, en el artículo 375, contempla seis motivos de invalidación, denominados “absolutos”.

CUARTO: Que, de la normativa anterior, la doctrina y jurisprudencia nacional, concluye la característica principal del recurso de nulidad penal, esto es, su carácter extraordinario, en atención que éste debe fundarse en causales explícitamente indicadas por el legislador, lo que resulta de enorme trascendencia, desde que de este modo se determinan los extremos de la competencia del tribunal ad quem.

QUINTO: Que, es un hecho evidente que el motivo de invalidación esgrimido por el recurrente, cimentado en el artículo 344 del Código de Procesal Penal, por haberse verificado la audiencia de lectura de sentencia fuera del plazo legal, no se encuentra dentro de las causales que la ley ha previsto expresamente para la concesión del recurso de nulidad- artículos 373 y 374 del mismo texto legal- y, por ello, esta Corte, dado su carácter extraordinario del recurso en cuestión, deberá rechazarlo.

A mayor abundamiento, en el contexto de esta alegación se reclama que la sentencia definitiva tampoco cumple con el requisito exigido en la letra g) del artículo 342 del Código Procesal Penal, esto es, la firma de los jueces que la hubieren dictado, sin embargo, la causal nulidad procede cuando en la sentencia se hubiere omitido alguno de los requisitos previstos letras c), d) o e) del citado artículo y



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: FPSJXUPBLXX

no la g), al tenor del literal e) del artículo 374 del código ya indicado, lo que reafirma el rechazo ya anunciado.

En relación a la causal de nulidad del artículo 374 letra e) del Código Procesal Penal.

SEXTO: Que, el segundo motivo de nulidad, invocado en el segundo otrosí del escrito contenedor del recurso de que se trata, se funda en la causal establecida en la letra e) del artículo 374 del Código Procesal Penal, esto es, cuando, en la sentencia, se hubiere omitido alguno de los requisitos previstos en el artículo 342, letras c), d) o e), del mismo código, específicamente, en relación con la primera letra antes citada.

En este sentido afirma, primeramente, que el tribunal valoró erróneamente la declaración prestada en juicio por el perito, médico legista, Felipe Solari Saldías, en cuanto el fallo indicó lo siguiente: *“Si bien el legista, planteó la existencia de una cosa extraña ya que el DAU del Hospital de Cochrane consigna que la persona estaba hemodinámicamente estable, pues de haberlo estado no habría sido necesario su traslado vía aérea, no se traslada vía aérea, tal situación no desvirtúa la conclusión precedente, pues consta en DAU de Hospital de Coyhaique que presentaba hemoneumotorax, que se instaló el tubo pleural y que se encontró 300 cc de sangre en la pleura, todo lo cual no deja duda, conforme a la explicación entregada por el perito, que la herida provocada a la víctima era de riesgo vital..”,* ello porque le quita el valor del Dato de Atención de Urgencia, (DAU) de fecha 19 de diciembre de 2023, del hospital de Cochrane el cual indica “Clínicamente estable, sin demandas HDM Estable” y no evalúa ni valora el segundo DAU del hospital de Coyhaique, de fecha 19 de



diciembre de 2023, el cual indica que el paciente (víctima) “ingresa estable”, dado que ambos DAU fueron firmados por médicos estableciendo que el paciente se encontraba estable, ósea, sin en riesgo vital y aun así el Tribunal le da mayor valor probatorio al perito, quien constató las lesiones tres meses después de la ocurrencia de los hechos e incluso cuestionó tales diagnósticos al sostener que deben haber sido fruto de un error de los médicos. Además, alega que no por el uso de un avión para el traslado de la víctima, se transforma el estado de ésta en riesgo vital, como erróneamente lo plantea el Tribunal, ya que el medio de traslado no afecta el resultado; por ello si el tribunal hubiese valorado correctamente la prueba debió haber recalificado el hecho a un delito de lesiones y no homicidio frustrado.

De otra parte, sostiene que la segunda situación que el tribunal no valora correctamente es la posesión del arma, ya que el acusado señaló que ésta le pertenecía a la víctima, dado que el ofendido vivía en dicho lugar de manera constante, había llegado al domicilio cinco días antes junto a su hijo, portando el arma, antecedente que fue negado por aquel, Diego Sandoval, quien señala haber llegado al lugar el mismo día de la ocurrencia de los hechos. A su vez el hijo de la víctima indica que sería falso lo dicho por su padre, ya que habían llegado hace cuatro días al lugar y estaban durmiendo en ese domicilio, lo que fue ratificado por el otro menor presente en el hecho, Felipe Vásquez, que indica que tanto la víctima como su hijo, concurrieron varios días antes al domicilio y que el arma pertenecía al ofendido, a quien observó cuando se la exhibió al acusado, además de andar con una bolsa de balas. Así, sostiene que dichas declaraciones corroboran lo declarado por el acusado, quien señala que el arma no



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: FPSJXUPBLXX

le pertenece, que solo la dejó bajo de una cama por seguridad, ya que no había donde guardarle y había niños en la casa. Entonces, el tribunal no valoró lo suficientemente la prueba, ya que claramente la víctima de autos mintió sobre la procedencia del arma y que se encontraba viviendo en ese domicilio, al no valorar correctamente las declaraciones de los menores ni tampoco cuestiona la intención del ofendido de mentir en su declaración, no reconociendo que estaba viviendo en ese domicilio y que el arma le pertenece.

SÉPTIMO: Que, el Ministerio Público, solicita el rechazo de esta causal, en atención a que Sobre la causal del artículo 374 letra e), refiere que, en cuanto al homicidio frustrado, el médico legista, como se contiene en el considerando duodécimo de la sentencia, se basa en un hemo neumotórax. Precisa que se señala claramente cuál es la razón que lleva al tribunal a determinar que nos encontramos ante un homicidio frustrado y que la víctima estaba en peligro de muerte, esto porque se instaló un tubo pleural y que se encontró 300 centímetros cúbicos de sangre en la pleura, lo que no deja dudas, conforme a la explicación dada por el perito, que la herida provocada a la víctima era de riesgo vital y hubiese muerto si no se instala el referido tubo, ya que su instalación obedece a dicho riesgo. Agrega que el perito explica que efectivamente esos 300 centímetros cúbicos en 12 horas pueden llegar a 800, lo que puede provocar una insuficiencia respiratoria y provocar la muerte, por lo que esa es la razón para el tribunal determinar que se está frente a un homicidio frustrado. Finalmente, que los datos de atención de urgencia no señalan que no ingresa en peligro de muerte, sino estable.



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: FPSJXUPBLXX

Respecto a la situación planteada de tenencia de arma de fuego, lo planteado por la defensa va contra lo señalado por el imputado, ya que refirió tenerla hace tiempo, precisando que la figura penal no exige ser dueño de dichos elementos, sino la tenencia sin autorización para ello, habiéndose acreditado que el imputado tenía el arma y las municiones en su poder. Por lo tanto, no existe ninguna infracción a los principios de la lógica, habiéndose hecho cargo el tribunal respecto de las alegaciones de la contraria en los considerandos Undécimo a Décimo Cuarto.

OCTAVO: Que, en relación con esta causal invocada por la defensa, se debe tener presente que el artículo 297 del Código Procesal Penal, establece que: “Valoración de la prueba. Los tribunales apreciarán la prueba con libertad, pero no podrán contradecir los principios de la lógica, las máximas de la experiencia y los conocimientos científicamente afianzados.

El tribunal deberá hacerse cargo en su fundamentación de toda la prueba producida, incluso de aquella que hubiere desestimado, indicando en tal caso las razones que hubiere tenido en cuenta para hacerlo.

La valoración de la prueba en la sentencia requerirá el señalamiento del o de los medios de prueba mediante los cuales se dieron por acreditados cada uno de los hechos y circunstancias que se dieron por probados. Esta fundamentación deberá permitir la reproducción del razonamiento utilizado para alcanzar las conclusiones a que llegare la sentencia”.

NOVENO: Que, este sentido, de acuerdo a la doctrina y jurisprudencia nacional, se puede advertir que este sistema de



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: FPSJXUPBLXX

valoración probatorio racional, reconoce dentro de sus elementos las reglas de la lógica, gobernadas por la coherencia y la derivación, basada la primera en los principios de identidad, no contradicción y tercero excluido, y la segunda en el de la razón suficiente, por lo que al apartarse un fallo de esas premisas, el razonamiento resulta cuestionable, porque se trataría una valoración puramente subjetiva, provocando, en último término, un fallo arbitrario.

DÉCIMO: Que, desde luego, se debe dejar asentado que de la simple lectura del libelo recursivo no aparece especificada algunas de las hipótesis de contravención de la valoración de la prueba, en términos de explicitar las contradicciones de los principios de la lógica, las máximas de la experiencia y los conocimientos científicamente afianzados, sencillamente nada se dijo sobre ello, precisión a la que estaba obligado el recurrente, desde que se trata de un medio de impugnación de carácter excepcional, de modo que corresponde a aquel detallar los extremos de su motivo de invalidez, a fin de fijar el marco de competencia dentro del cual esta Corte debe esgrimir sus consideraciones y emitir su pronunciamiento definitivo, no correspondiendo, por ende, a estos sentenciadores suplir dicha falencia.

UNDÉCIMO: Que, tanto es así que el recurrente sostiene genéricamente que el sentenciador no valoró correctamente la prueba, particularmente, los datos de atención de urgencia al brindarle mayor valor a la declaración del médico legista para determinar el riesgo vital que provocaron las lesiones de la víctima y, por ende, la existencia de un homicidio frustrado y no un delito lesiones, como tampoco lo hizo respecto de las declaraciones de los menores que señalan que el



arma le pertenecía a la víctima y ésta vivía en el domicilio, reparos éstos que denotan un parecer distinto con relación a lo concluido por el tribunal a quo y no un ataque a la validez del razonamiento probatorio, máxime si la sentencia recurrida esgrime los fundamentos bastantes para establecer, por una parte, que una de las heridas proferidas a la víctima era de riesgo vital, sustentada en el Dato de Atención de Urgencia del Hospital Regional de Coyhaique de fecha 19 de diciembre de 2023, concatenado con la declaración pericial, considerando el hemo neumotórax y la instalación de un tubo pleural y, por la otra, que la figura penal de la tenencia de arma de fuego y municiones no exige que el autor del delito sea dueño de ellas sino que solamente las tenga en su poder, ya que lo que se sanciona es la tenencia sin autorización para ello, reconociendo el propio acusado que mantenía dichas especies en su poder, de modo que, a juicio de esta Corte, se hace una correcta valoración de la prueba, ajustándose los reproches del recurrente más bien a una cuestión de mérito probatorio consustancial a un recurso de apelación y no de una causal de nulidad como la que se trata en esta causa, por lo que ésta se rechazará en lo resolutivo.

DUODÉCIMO: Que, en consecuencia, conforme a lo razonado, la causal de nulidad cimentada en el artículo 344 del Código Procesal Penal, así como el motivo invalidez que prevé el artículo 373 letra e) del mismo código, no resultan procedentes y, por ello, se rechazará el recurso de nulidad interpuesto por el defensor privado y así se declarará.

Y VISTO, además, lo dispuesto en los artículos 352, 372, y siguientes del Código Procesal Penal, **SE DECLARA:**



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: FPSJXUPBLXX

Que, **SE RECHAZA**, sin costas, el recurso de nulidad planteado en lo principal y primer otrosí de la presentación de 20 de enero de 2025, por don Aldo Basqueé Cid, abogado, defensor privado, en representación de **JUAN CARLOS IBÁÑEZ PAREDES**, por las causales que alegó, en contra de la sentencia definitiva pronunciada con fecha doce de febrero del año dos mil veinticinco, dictada por el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Coyhaique, conforme a la cual se condena a su representado a la pena de CINCO AÑOS Y UN DÍA DE PRESIDIO MAYOR EN SUGRADO MÍNIMO, accesoria de inhabilitación absoluta perpetua para cargos y oficios públicos y derechos políticos y la de inhabilitación absoluta para profesiones titulares mientras dure la condena, como autor de un delito de HOMICIDIO SIMPLE, previsto y sancionado en el artículo 391 N°2 del CP, en grado frustrado, cometido el día 19 de diciembre de 2023 en el sector de San Lorenzo, comuna de Cochrane, en contra de D.J.S.C; a la pena de TRES AÑOS Y UN DÍA DE PRESIDIO MENOR EN SU GRADO MÁXIMO, más accesoria de inhabilitación absoluta perpetua para derechos políticos y la de inhabilitación absoluta para cargos y oficios públicos durante el tiempo de la condena, como autor de un delito de TENENCIA DE ARMA DE FUEGO, previsto y sancionado en el artículo 9 en relación al artículo 2 letra b), ambos de la Ley 17.798 sobre Control de Armas, en grado consumado, cometido el día 20 de diciembre de 2023, en sector San Lorenzo, comuna de Cochrane, atendido que mantenía en su domicilio un rifle calibre .22 y 4 municiones calibre .22, aptos para el disparo, sin contar con autorización para ello; y a la pena de QUINIENTOS CUARENTA Y UN DÍAS DE PRESIDIO MENOR EN SU GRADO MEDIO, más accesoria



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: FPSJXUPBLXX

la de suspensión de cargo u oficio público durante el tiempo de la condena, como autor de un delito de TENENCIA DE MUNICIONES, previsto y sancionado en el artículo 9 en relación al artículo 2 letra C), ambos de la Ley 17.798 sobre Control de Armas, en grado consumado, cometido el día 20 de diciembre de 2023, en sector San Lorenzo, comuna de Cochrane, atendido que tenía en su domicilio una munición calibre 7.62 apta para el disparo, sin contar con autorización para ello; decidiéndose, en consecuencia, que ésta no es nula.

Regístrese, comuníquese y devuélvanse los antecedentes pertinentes.

Redacción del ministro titular, don José Ignacio Mora Trujillo.

Rol I. C. número: 91-2025.

R.U.C. número 2301397181-1 (Penal).



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: FPSJXUPBLXX

Pronunciado por la Primera Sala de la C.A. de Coyhaique integrada por Ministro Presidente Pedro Alejandro Castro E. y los Ministros (as) Jose Ignacio Mora T., Natalia Rencoret O. Coyhaique, dieciseis de mayo de dos mil veinticinco.

En Coyhaique, a dieciseis de mayo de dos mil veinticinco, notifiqué en Secretaría por el Estado Diario la resolución precedente.



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: FPSJXUPBLXX